



¿NUEVA GRAMÁTICA POLÍTICA? RECONSIDERACIONES SOBRE LA EXPERIENCIA PIQUETERA EN LA ARGENTINA RECIENTE¹

NEW POLITICAL GRAMMAR? REVISITING ON PIQUETEER EXPERIENCE IN RECENT ARGENTINE

Ana Natalucci

Instituto de Investigaciones Gino Germani, Universidad Nacional de Buenos Aires
CONICET
anatalucci@gmail.com

Resumen

A posteriori de 2003, el espacio de experiencia piquetera se reconfiguró perdiendo la centralidad política que había conquistado en la crisis de 2001. Siguiendo la premisa que las experiencias políticas dejan huellas es pertinente reformular la clave con la que se ha investigado este fenómeno. Este artículo se propone desplazar el eje de la consideración de las organizaciones piqueteras como un sujeto político, para reflexionar en sus acciones y el impacto político que tuvieron para el espacio multiorganizacional. ¿Qué rastros dejó la experiencia piquetera? ¿Cuál fue su performatividad en términos de reconfiguración del discurso público? ¿Qué quedó de la experiencia piquetera en la cultura política argentina? ¿Es posible sostener que esa rearticulación se constituyó como una gramática política? El argumento central del artículo es que la movilización y la acción territorial de las organizaciones piqueteras se rearticulaban de una forma novedosa en el campo multiorganizacional pero sin constituir una nueva gramática.

En pos de este objetivo, se reconsidera la experiencia piquetera en la Argentina reciente. La relevancia del estudio de estas experiencias radica en que permiten pensar de manera simultánea y compleja las relaciones entre la movilización social, el Estado y el espacio público, aportando en consecuencia al debate sobre las características que asumen los sujetos colectivos y sus organizaciones a la luz de las (nuevas) conflictividades.

Abstract

Since 2003, the space [*raum*] of piqueteer experience reconfigured losing the political centrality they had achieved in the 2001 crisis. Following the premise that political experiences leave traces, it is relevant to reformulate the key by which this phenomenon has been investigated. This article proposes to shift the axis of the consideration of piqueteers organizations as political subjects, to reflect on their actions and political impact that they had for the multi-organizational field.

What traces left piqueteers experience? What was its performance in terms of reconfiguration of public discourse? What was the piqueteers experience in Argentina's



political culture? Is it possible to argue that this new articulation is constituted as a political grammar?

The central argument of this paper is that the mobilization and territorial action of piqueteers organizations articulate a new way of multi-organizational space but they don't conform a new grammar. In pursuit of this objective, piqueteer experience is reconsidered in recent Argentina. The relevance of the study of these experiences is that it allows thinking relationships between social mobilization, the state and public space, contributing to the debate about the characteristics assumed by social groups and their organizations in a context of (new) conflicts.

Palabras claves: gramáticas políticas – piqueteros - Argentina reciente

Key words: political grammar - space of piqueteer experience - recent Argentine

I. Introducción

Una de las mayores novedades en la movilización social reciente argentina ha sido la constitución de organizaciones de trabajadores desocupados, acompañada por una recreación de los repertorios de acción y las modalidades de intervención en el espacio público. La preponderancia que este fue cobrando en el espacio público determinó que los científicos sociales se abocaran a su estudio.

En la literatura sobre las organizaciones de desocupados ha habido dos conjuntos de preguntas. El primero se organizó en torno a la relación entre el proceso económico y político y la movilización piquetera. De esta se desprendían otras relativas a la denominación del movimiento piquetero como un movimiento social, los vínculos generados entre el régimen político y las organizaciones; y por el impacto político que aparejó esta experiencia. El debate se concentró en la incidencia de la exclusión como condición de posibilidad de la organización colectiva (Calvo, 2006; Merklen, 2005), a las condiciones políticas en que podía plantearse la constitución y consolidación de un espacio piquetero (Svampa y Pereyra, 2003), los clivajes por los cuáles podían reconstruirse los afluentes (Pereyra, Pérez y Schuster, 2008; Svampa, 2005 y Svampa y Pereyra, 2003), la incidencia de lo territorial en la delimitación de una nueva modalidad de acción (Delamata y Armesto, 2005; Delamata, 2004) y las relaciones entre la protesta social y las organizaciones (Masseti, 2009; Pereyra, Pérez y Schuster, 2008; Schuster, Pérez, Pereyra, Armesto, Armelino, García, Natalucci, Vázquez y Zipcioglu, 2006; Auyero, 2002). Usualmente, estos estudios no se abocaron al análisis de un caso, sino a la



elaboración de mapas organizacionales a partir de los cuales delinear tendencias y establecer comparaciones.

El segundo conjunto de preguntas se organizó en una clave microsociológica, que guiada por un espíritu etnográfico tomaba experiencias u organizaciones acotadas por lo general en el conurbano bonaerense. Algunos científicos indagaron sobre la forma de construcción política de una organización, por ejemplo el MTR (Ferraudi Curto, 2008); otros la experiencia de los desocupados a partir de la vida cotidiana de quienes participan de esas organizaciones (Quirós, 2006) o la relación entre biografías individuales y episodios de protestas (Auyero, 2004).

Respecto de la pregunta si podía hablarse de un movimiento piquetero, algunos científicos se inclinaron a renegar de esta posibilidad, remarcando su doble origen, la diversidad de organizaciones involucradas y las desiguales apropiaciones sobre la identidad piquetera (Pereyra, Pérez y Schuster, 2008, Delamata, 2004, Svampa y Pereyra, 2003 y Auyero, 2002).

Bajo este acuerdo, en un trabajo anterior me referí a aquel a partir de la noción de *campo de experiencias*. Siguiendo el planteo de Reinhart Koselleck (2001; 1993) es posible entenderlo como un espacio en el que intervienen organizaciones diferentes en cuanto a sus definiciones político-ideológicas, por lo que se presentan tensiones, modos divergentes de intervención y apropiaciones desiguales sobre la identidad piquetera. Esta heterogeneidad es irreductible a ese espacio. Ahora bien, la articulación de determinados elementos comunes posibilitó su proceso de constitución y capacidad de acción: a) la existencia de un repertorio de acciones comunes, b) la estrategia de cooperación inicial y la voluntad de coordinar acciones, c) el desarrollo territorial y d) la elaboración de un lenguaje de derechos, con el cual expresar sus demandas y formular interpelaciones en el espacio público (Natalucci, 2010a; 2008a).

Resumiendo, más allá de las denominaciones que haya adquirido el fenómeno piquetero, hay un acuerdo relativo entre los científicos en torno a considerar que las organizaciones tuvieron una importante presencia pública y un sostenido desarrollo territorial. Este despliegue aparejó un doble cuestionamiento “desde abajo”. Por un lado, a las modalidades de dominación política al rebatir el carácter delegativo de la política y al reponer la centralidad de la acción directa. Por otro lado, al resignificar los planes sociales otorgados por el gobierno y reconvertirlos en recursos organizacionales bajo la idea de “conquistas” o derechos recuperados según la tendencia ideológica de cada organización.



Ahora bien, entre fines de 2003 y principios de 2004 ese espacio piquetero se reconfiguró perdiendo la centralidad política que había conquistado en la crisis de 2001. Siguiendo la premisa que las experiencias políticas dejan huellas entiendo que es necesario reformular las preguntas a partir de las cuales se intentó comprenderlas. Por ello, la propuesta de este artículo es cambiar la clave de indagación, esto es, dejar de lado el debate acerca de si las organizaciones piqueteras pueden considerarse como un movimiento social² o como un sujeto político (Pérez y Natalucci, 2008),³ para reflexionar en sus acciones y el impacto político que tuvieron para el espacio multiorganizacional.⁴

¿Qué rastros dejó la experiencia piquetera? ¿Cuál fue la performatividad en términos de su reconfiguración del discurso público? ¿Qué quedó de la experiencia piquetera en la cultura política argentina? ¿A partir de sus huellas es posible concluir que se constituyó una gramática política? El argumento central que pretendo sostener es que la movilización y la acción territorial de las organizaciones piqueteras se rearticulaban de una forma novedosa en el campo multiorganizacional constituido por “sindicatos, partidos políticos de izquierda y organizaciones sociales” (Svampa, 2008: 9). Estimo que aún el carácter paradigmático y excepcional de esta experiencia, sin embargo como corolario de ese proceso no se conformó una nueva gramática política. En este marco, se reconsidera la experiencia piquetera en la Argentina reciente. La relevancia del estudio de estas experiencias radica en que permiten pensar de manera simultánea y compleja las relaciones entre la movilización social, el Estado y el espacio público, aportando en consecuencia al debate sobre las características que asumen los sujetos colectivos y sus organizaciones a la luz de las (nuevas) conflictividades.

En su presentación, el artículo se organizó en varios apartados luego de esta Introducción. En el segundo, se desarrolla el concepto de gramática política. En los siguientes, se reconstruyen los afluentes piqueteros. En el sexto se presentan las tensiones que se produjeron en el espacio. Por último, en el apartado de Reflexiones finales se profundiza si es posible pensar en la constitución de una nueva gramática política.

II. Precisiones conceptuales

Como se mencionó en la Introducción, el propósito de este artículo es correr el eje de la discusión del espacio piquetero como movimiento social o como sujeto político y



reflexionar sobre sus acciones y su impacto político.⁵ En este apartado se retoma la noción de gramática, planteando una discusión en torno a su productividad analítica.

El concepto de gramática puede tener tres acepciones: a) performatividad política de la acción, donde el estudio se orienta a una perspectiva pragmatista; b) estructura motivacional de los sujetos implicados; lo que habilita un enfoque fenomenológico; y c) estructura organizativa de los movimientos sociales, en clave la movilización de recursos.

La primera acepción de la noción de gramática remite a la obra de Ludwig Wittgenstein. No obstante es de consulta ineludible para los interesados en la filosofía del lenguaje, en el seno de las ciencias sociales se generó una controversia respecto de este aporte al estudio de problemas de orden político. Por un lado, Schuster (2006) siguiendo a Heyes sostiene que aquel filósofo no se mostró interesado en la filosofía política, aunque reconoce que su obra sin dudas excedió los límites disciplinares.⁶

Por otro lado, Hannah Pitkin (1984) disiente en que la obra de Wittgenstein pueda ser considerada conservadora en lo cultural y en lo político. Y si bien sostiene que este no realizó una contribución concreta a la “teorización de la política contemporánea” ya que no escribió sobre “la historia, la revolución o la alienación” (1984: 455), sí aportó al estudio de las teorías políticas al postular que el mundo se estructura mediante el lenguaje y que este no es un simple vehículo de pensamientos. Esta afirmación se vincula con la respuesta que brinda Pitkin acerca de si es posible pensar en una teoría política wittgensteiniana. Al respecto, sostiene que “deberíamos pensar en un modo de wittgensteiniano de teorizar sobre lo político” (Pitkin, 1984: 469). Pese a que la autora no da precisiones sobre las implicancias de ese modo, menciona que este “sería plenamente consciente de y haría pleno uso de la pluralidad de casos particulares [...] sustituiría perspectivas parciales desarrolladas *ah hoc* allí donde fuesen necesarias” (1984: 469. Cursivas en el original). Por esta razón, la reflexión en torno a las gramáticas políticas no se situará específicamente en la obra de Wittgenstein, sino más bien en autores que, tributarios de su obra, se ocuparon específicamente de la política. La productividad de esta perspectiva se justifica en que delineó las “bases de una concepción pragmática de la política [es decir, como una] “red de significados en acción, como juego de lenguaje” (2006: 106).

Para Pitkin el estatuto político de aquellas gramáticas está dado por su búsqueda de visibilidad y legitimidad pública. En este mismo sentido, Schuster sostiene que la política puede tener varios efectos, pero que todos ellos son “capaces de definir o



transformar las condiciones del orden social” (2006: 108). Vinculada con esta idea se encuentra la noción de realizatividad que en sentido estricto remite a “la capacidad inherente a toda enunciación pública de redefinir las reglas y los recursos que constituyen el campo simbólico dentro del cual se produce y se reconoce” (Pérez, 2005: 330). Este concepto implica dos dimensiones, aquella por la cual el sujeto se constituye en enunciador y ubica al destinatario de su discurso –dimensión enunciativa– y otra en la que dicho enunciador establece una relación con el contenido de su discurso en términos de “un querer, un poder, un saber y/o un deber que configuran el sentido público de su práctica política –dimensión modal–” (Pérez, 2005: 330).

Por su parte, el sociólogo francés Danny Trom realizó una genealogía en torno a la noción de gramáticas de la movilización tomando el aporte de los filósofos pragmatistas. A raíz de este recorrido, sobre todo por su lectura de Wright Mills, ubica a los motivos como central en aquellas gramáticas. Para Trom es necesario “pasar a una pragmática de la acción” (2008: 33) así como concebir que la acción y la situación “existen en una relación de determinación recíproca” (2008: 33). Desde esta perspectiva, los motivos son “la instancia que liga acción y situación” (2008: 34). En otras palabras, estos ofrecerían los argumentos y fundamentos de las acciones. Los derechos suelen mencionarse en las justificaciones que las organizaciones elaboran respecto de sus acciones; favoreciendo que las razones sean reconocibles y fácilmente aceptadas en el espacio público en cuanto apelan al bien común. Trom siguiendo a Pitkin sostiene que en esas gramáticas de la movilización se articulan en una gama de actuaciones con un lenguaje específico.

De acuerdo con Trom (2008), una gramática aporta un repertorio de argumentos, justificaciones y marcos para la interpretación de las acciones propias y de otros. Por ello, una gramática delinea la manera en que un sujeto colectivo interviene en el espacio público, encuentra motivos de justificación y razones para actuar, establecer estrategias de coordinación o articulación política, inscribe a otros sujetos en interrelación y propone un modo de ordenamiento, a partir de la consideración que la política tiene un sentido destituyente y también uno instituyente. Esta es entendida en un sentido amplio como práctica intersubjetiva, contrariamente a la visión restrictiva que la igualaría al subsistema político, compuesto por el Estado, el gobierno o los partidos políticos.

Esta concepción de las gramáticas presenta dos inconvenientes. Por un lado, remite a la estructura motivacional de los sujetos, lo cual llevaría a la necesidad de un



enfoque fenomenológico. Por otro lado, hay una confusión entre gramáticas políticas, de la acción y de la movilización que es necesaria clarificar para que el concepto conserve su eficacia explicativa.

La noción de gramática política excede a la de gramática de la movilización en tanto esta última incluye modalidades de confrontación con el gobierno y otros sujetos colectivos, estilos organizativos y cuestiones relativas a su dinámica cotidiana, remitentes a su construcción interna. Alrededor de este punto podría encontrarse la tercera acepción presentada con anterioridad, esto es, como estructura organizativa de los movimientos sociales.

Como se mencionaba, una gramática política no es reductible a las formas o estilos de construcción política de una organización, dado que dicha acepción alude a las modalidades de construcción, espacios de deliberación y toma de decisiones; en definitiva a la distribución interna del poder. Por el contrario, la noción de gramática política alude a la definición de reglas y la formulación de problemas públicos a partir de conflictos, acotando las posibilidades de sus términos de referencia y búsqueda de soluciones.

Resumiendo y de acuerdo a lo expuesto, una gramática política debe entenderse como un juego de reglas no escritas que delimita, por un lado, las interacciones de los sujetos; y por otro, las combinaciones de acciones para coordinar, articular o impulsar intervenciones públicas, acciones que se dirijan a cuestionar, transformar o ratificar el orden social. En una clave analítica, esta noción de gramática dota de un principio de inteligibilidad a las acciones.

III. La emergencia del espacio piquetero

La emergencia del espacio piquetero se produjo en el marco de transformaciones de la movilización social. Las primeras coordinadoras surgieron en 1994 mientras el gobierno nacional presidido por Carlos Menem intentaba, por un lado, desactivar el conflicto sindical y por otro, mantener localizadas las protestas que surgían en el interior del país a propósito de la crisis de las economías regionales.⁷ En un principio, los protagonistas eran organizaciones sindicales del sector público que resistían procesos de ajuste económicos en la órbita local; luego se produjeron una sucesiva de levantamientos locales en el interior del país (Svampa y Pereyra 2003). En el curso de 1997, hubo movilizaciones paradigmáticas en varias provincias: Neuquén, Salta, Jujuy y Córdoba. En la escalada de la movilización, el gobierno nacional intentó socorrer financieramente a las



provincias, al mismo tiempo que intentó desligarse de sus responsabilidades. Por estas cuestiones, la movilización piquetera tuvo un ritmo propio, aunque yuxtapuestos con otros sujetos colectivos. De esta manera, hasta 1994 el alcance de la movilización fue provincial, hacia 1997 se nacionalizó, para descender inmediatamente y reaparecer en 2001.

La posibilidad de la emergencia del espacio piquetero se vio favorecida por las acciones de las organizaciones sindicales, especialmente en relación con la conformación de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) en 1992 y del Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA) en 1994.⁸ En principio, ambos nucleamientos cuestionaron tempranamente los costos del modelo económico propiciando la articulación entre diversos sujetos colectivos. Tal fue el sentido de la consigna de CTA “por un modelo social sin exclusiones”.

En este marco, se constituyeron multisectoriales cuya estabilidad fue limitada, pero que sin embargo permitieron otorgarle visibilidad a las organizaciones de desocupados. Sus demandas por la reparación histórica de la región implicaban, por un lado, un esfuerzo por recuperar ese pasado próspero y, por otro, organizaban el campo de conflicto entre un adversario acotado como el gobierno y un “nosotros” amplio con un margen importante para la construcción de solidaridades intersectoriales.

En esta dirección, en 1997 irrumpieron abruptamente puebladas en el interior del país, en muchos casos protagonizadas por esas multisectoriales donde sobresalían organizaciones que nucleaban a trabajadores desocupados. La rápida visibilidad que adquirieron estas protestas estuvo estrechamente vinculada con la modalidad de intervención pública, es decir asentarse en las rutas nacionales cortando la circulación de mercancías, productos y personas por tiempo indeterminado o, en otras palabras, hasta tanto se obtuvieran respuestas a sus reclamos. Asimismo, las demandas formuladas en términos de derechos, principalmente al trabajo, fue un factor decisivo para contar con el apoyo de aquellos que si bien no padecían esta problemática podían solidarizarse con ella.

En este sentido, operaron algunos cambios que fueron fundamentales para las características que asumió el espacio piquetero. Por un lado, la desocupación se constituyó como el problema público que legitimaba la radicalidad de la modalidad de protesta. Esto tuvo otra consecuencia, ya que al ser conceptualizada de dicha manera permitió que los sujetos individuales pudieran resignificarla como una consecuencia del



modelo económico y no como un atributo personal. Esta despersonalización del fenómeno favoreció directamente el crecimiento de las organizaciones de desocupados.

En el transcurso de ese proceso se produjeron varias innovaciones respecto de la movilización, generando ciertas condiciones para la constitución de una nueva gramática política. Concretamente, surgió un nuevo sujeto colectivo, con demandas que se expresaban en la clave de derechos y se recreó la modalidad del corte de ruta o piquete.

Algunos casos como el de Cutral Co y Tartagal tuvieron más resonancia mediática que el de Cruz del Eje o el de Alta Gracia, sin embargo guardan algunas coincidencias que permiten pensar en la constitución de un espacio piquetero. Además del repertorio de acciones comunes, estrategia de cooperación inicial, desarrollo territorial y la elaboración de un lenguaje de derechos, la presencia de multisectoriales como integrantes de las protestas le permitió a estas experiencias mejorar la capacidad de negociación con el gobierno.

En general, las diferencias entre estas puebladas se relacionaron con la identificación y auto reconocimiento que subyacía a la constitución de cada organización. En otras palabras, no todos los desocupados admitían denominarse de dicha manera. Siguiendo a Svampa y Pereyra para muchos la “identificación como desocupados les resultaba intolerable” (2003: 32). Algunas experiencias como las de Neuquén o Tartagal donde el proceso de desindustrialización había sido reciente dificultó que los desocupados pudieran asumirse como tal. En el caso de Cruz del Eje, cuyos integrantes nunca habían tenido un trabajo estable, sino que el imaginario del trabajo como integrador social databa de sus padres, se destacaba la entidad de desocupado como estrategia para remarcar su condición de trabajadores.

Más allá de estas diferencias en cuanto a la entidad de reconocimiento, lo cierto es que dichas organizaciones compartían como horizonte de expectativas un trabajo estable, como situación de prosperidad y ascenso social.

De la difusión del corte como modalidad de confrontación a su integración al repertorio de acción

Con la serie de levantamientos populares y la emergencia de las primeras coordinadoras quedó inaugurada otra etapa de la movilización, que hasta entonces había tenido un carácter provincial. En otras palabras, a posteriori de 1997 se generó un consenso alrededor de las experiencias y actores que venían protagonizando la dinámica política.



La visibilización pública de las organizaciones de desocupados tuvo un impacto positivo, en tanto aquellos fueron reconocidos como interlocutores legítimos del proceso de conflictividad.

Aún cuando este fortalecimiento de las organizaciones fue decisivo en la nacionalización del conflicto, es menester traer a colación otro elemento de superación de las lógicas provinciales. Este no fue otro que la difusión del corte de ruta como modalidad de acción contenciosa. Esta no era estrictamente novedosa para los actores movilizados, ya que formaba parte del abanico de posibilidades que manejaban las organizaciones sindicales, sobre todo en los piquetes en las puertas de las fábricas para convocar a asambleas. Sin embargo, a lo largo de este proceso aquella modalidad fue incorporada por los sujetos colectivos emergentes. Esta apropiación versaba sobre dos aspectos. En principio, en términos de performatividad había demostrado una efectividad mayor que otras modalidades. Es decir, la sola presencia de organizaciones en las rutas nacionales provocaba la atención de los medios y de los gobiernos nacional y provincial, más allá de cómo se resolviera luego la negociación. Asimismo, la conjunción de cortes de rutas nacionales con puebladas favoreció la formulación de las demandas en un lenguaje de derechos, que evidentemente fortaleció la articulación intersectorial.

A fortiori, tan fuerte fue el impacto de esta modalidad que las organizaciones fueron bautizadas por los medios de comunicación y sectores espectadores como piqueteros. Esta asignación fue el elemento unificador de la identidad de estos sectores que les permitió superar algunas diferencias, tales como aquellas en términos de trayectorias laborales, para ser reconocidos y auto reconocerse como los que están en las rutas para reclamar por sus derechos.

Claro que esta difusión del corte de ruta como modalidad de acción fue estigmatizada por los sectores dominantes, generando una disputa en la clave de derechos. El núcleo de esta controversia, (que tuvo como momentos de efervescencia 1997 y 2001-2002 –no por casualidad el momento de constitución y auge del espacio piquetero–), giraba en torno a dos posiciones: el derecho de protestar y manifestarse y el de circular libremente (Gargarella, 2006). La discusión no sólo era jurídica, sino que tenía como implicancia fundamental la habilitación para despejar las rutas por la fuerzas de seguridad. Este aparente enfrentamiento de derechos quedó desarticulado cuando desde los sectores movilizados se reivindicó la utilización de esta modalidad en cuanto a su interlocutor; es decir este no sólo era sólo el gobierno, sino también el *pueblo*, y el objeto



de reclamo no se restringía a situaciones particulares, sino a la problemática de la desocupación.

En definitiva, los levantamientos en el interior del país y la rápida difusión que tuvieron hacia otras experiencias, la emergencia de organizaciones de desocupados y la apropiación del corte de ruta como parte del repertorio de acción de los sectores movilizados se conjugaron en el afluyente de los levantamientos en el interior del país. De esta manera, el espacio piquetero tomaba forma bajo el calor de la movilización y se legitimaba en otros sectores y áreas de la Argentina, principalmente en lo inmediato en el Conurbano bonaerense.

Ahora bien, como se mencionó en la Introducción la pregunta por posibilidad de hablar de una gramática política se relacionó no sólo con la innovación en la movilización social sino con una articulación con el trabajo territorial. Sin embargo, las experiencias que mencionamos hasta ahora no tenían esa tendencia. Esta atribución no provino de las organizaciones del interior del país. Por el contrario, fue el aporte de las organizaciones que se gestaron en el conurbano bonaerense. La emergencia de estas tuvo dos corolarios sobre el espacio piquetero. Primero, se quebró el carácter multisectorial pasando a nuclear organizaciones que se auto reconocían como piqueteras o de desocupados. Segundo, se le otorgó un arraigo territorial, introduciendo discusiones relativas a los comedores, los planes sociales, la auto gestión, etc. En este sentido, se produjo como paradoja que al mismo tiempo que se delineaban los rasgos principales de un espacio piquetero, se quebraron lazos con otras organizaciones.

IV. El afluyente territorial del Conurbano bonaerense

Con la incorporación de las organizaciones radicadas en el Conurbano bonaerense la nacionalización del espacio piquetero llegó a su máxima expresión, apuntalando su consolidación y fortaleciendo su constitución como interlocutor legítimo ante el gobierno nacional.

Muchas de estas organizaciones ya tenían un desarrollo territorial ligado a la problemática de la tierra y la vivienda (Merklen, 2005). Sin embargo, uno de los hitos se produjo cuando Luis D'Elía, dirigente de la Cooperativa El Tambo de La Matanza, se afilió a la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) en 1996.⁹ Como resultado de esta incipiente alianza se fundó la Federación de Tierra y Vivienda (FTV).¹⁰ Otro de los hitos se produjo con la constitución de la Corriente Clasista y Combativa (CCC). De acuerdo con



Fornillo (2008) esta surgió como brazo territorial del Partido Comunista Revolucionario, en el cual se nucleaban sindicatos de base y comisiones internas de fábricas. Debido lo paradigmático de la crisis económica de principios del siglo en curso, se inclinó por la organización territorial y la instalación de comedores comunitarios.

La rápida consolidación del afluyente territorial se vinculó al desarrollo previo que tenían las organizaciones, al surgimiento en un distrito populoso como es La Matanza como también a las trayectorias comunes de los dirigentes y de las bases sociales (Svampa y Pereyra, 2003). En esta conjunción fue determinante la masividad que mostraron los cortes instalados en la ruta nacional 3, a escasos kilómetros de la Capital Federal. En consecuencia, el impacto político respecto de la capacidad de negociación y presión para la entrega de planes sociales fue significativo. Como corolario, se instauró entre ambas organizaciones una alianza táctica, no basada necesariamente en acuerdos ideológicos ni programáticos y que en el transcurso de las Asambleas Nacionales Piqueteras durante 2001 recibió el nombre de “eje matancero”.¹¹

Por último, este afluyente se constituyó también por organizaciones auto-definidas como autónomas, los Movimientos de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón (MTD) en los partidos de Lanús, Almirante Brown, Florencia Varela y San Francisco Solano. Estas se constituyeron y consolidaron resaltando sobre todo su modalidad de construcción política: el autonomismo. Esa definición apelaba a una modalidad que “se desarrolla en contraposición a los mecanismos de toma de decisiones de tipo delegativo y representativo, cobrando centralidad la asamblea y la horizontalidad como forma fundamental para la deliberación y toma de decisiones” (Burkart y Vázquez, 2008: 298). Entre 1997 y 2001, tuvieron diferentes instancias de coordinación como modo de sortear las dificultades que se les presentaban para gestionar planes: la Coordinadora Sur y la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón respectivamente (Burkart y Vázquez, 2008).

Recapitulando, la constitución de estas organizaciones dio cuerpo al afluyente territorial del Conurbano bonaerense. La confluencia de este junto con el de los levantamientos del interior del país consolidó el espacio piquetero: se reafirmó la identidad piquetera, se establecieron lazos entre organizaciones, se expandió la utilización del corte de ruta como modalidad de acción, se fortaleció el lenguaje de derechos y se posibilitó la realización de instancias de coordinación de planes de lucha a nivel nacional. Asimismo, el espacio definitivamente se nacionalizó. Esta cuestión, además de ser importante para



el crecimiento organizacional, aparejaba otro beneficio: la mayor capacidad para la obtención de planes sociales, el único recurso que el gobierno de Menem y de De La Rúa ofrecían a cambio del levantamiento del corte de rutas.¹² A su vez, la recepción masiva de estos planes permitió que muchas organizaciones pudieran desarrollar un intenso trabajo territorial a partir de la instalación de comedores y copas de leche.

La vocación de la construcción territorial de estas organizaciones debe atribuirse a que la mayoría de sus integrantes no tenían una experiencia originaria como trabajadores, a diferencia de lo que ocurrió con las del interior del país. Su orientación hacia el fortalecimiento territorial fue una característica distintiva. Incluso en diversos encuentros fomentaron la creación de cooperativas o emprendimientos que abrieran una discusión en torno a formas novedades del trabajo, ya no como labor asalariada en una fábrica, sino remitiendo a la posibilidad de generar las condiciones de su subsistencia.¹³

En suma, la constitución del *espacio piquetero* fue embrionaria entre 1994 y 1997 a propósito de la emergencia del afluyente del interior del país. Luego de la visibilidad de diferentes coordinadoras de trabajadores desocupados en las puebladas de 1997 se generaron las condiciones para su consolidación y su expansión a otras regiones del país. En este proceso tuvo especial importancia la emergencia y posterior afianzamiento del afluyente territorial en el Conurbano bonaerense, sobre todo porque la cercanía con el poder central favoreció la consolidación de la nacionalización del proceso.

De esta manera, se produjo una influencia interorganizacional respecto de modalidades de acción, intervención pública y construcción territorial –favorecida por la recepción de planes sociales– que fortalecieron al espacio piquetero. Pese a que cada organización se apropió de modo diferente de estas cuestiones, lo cierto es que generaron un sentimiento de pertenencia a dicho espacio que les permitió articular movilizaciones, organizar encuentros para acordar posicionamientos políticos y planes de lucha y, fundamentalmente, abrir discusiones en torno a la generación “desde abajo” de un nuevo modelo de integración.

La intervención de los partidos de izquierda en el espacio piquetero se relacionó en parte con el oportunismo de estos cuando creyeron ver en las organizaciones al sujeto revolucionario. Por otra parte, introdujeron un debate en torno a la participación política del espacio que hasta entonces no tenía preponderancia. En términos de los sentidos que se precisaron sobre la política era uno de tipo restringido: como intervención en las



estructuras partidarias y elecciones. Esto generó fuertes debates internos e incluso en algunas coyunturas electorales puso en crisis los espacios de coordinación y articulación.

V. La emergencia del último afluyente del espacio piquetero: las organizaciones de desocupados de los partidos de izquierda

La asunción de Fernando De La Rúa y Carlos Álvarez a la presidencia y vicepresidencia respectivamente a fines de 1999 abrió una serie de oportunidades políticas que permitieron redefinir los alineamientos organizacionales. Algunas organizaciones, entre ellas CTA, adherían a esta posibilidad bajo la consigna: “transformar la crisis en una oportunidad”.

En este marco, surgió una discusión entre los partidos de izquierda alrededor de qué hacer frente al protagonismo que cobraban las organizaciones de desocupados, sobre todo ante el despliegue del afluyente del Conurbano bonaerense. Una cuestión que sin dudas tuvo incidencia en ese debate fue la reelaboración del problema público en torno a los costos del modelo económico y la necesidad de luchar contra el neoliberalismo, favoreciendo la articulación de sujetos y demandas como también el impacto político de las protestas, en un marco de creciente movilización.

Los partidos de izquierda hasta esa fecha se habían mantenido al margen de cualquier intervención sobre el espacio piquetero, pese a que discutían que estrategia adoptar respecto de los desocupados y sí había que constituir organizaciones que los contuvieran. En este debate participaron los partidos trotskistas –Partido Obrero (PO), Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST)¹⁴, el Partido Comunista y la Corriente Nacional Patria Libre, de la tradición de la izquierda nacional.¹⁵ Hubo tres ejes de discusión: el desocupado como sujeto histórico de vanguardia, tipo de organización y planes sociales (Natalucci, 2010a y 2010b).

Respecto del primero, los trotskistas coincidían en caracterizar a los desocupados como un ejército de reserva o lumpen proletariado. No obstante, cuando la desocupación adquirió un carácter estructural y el proceso de movilización piquetero fue evidente, tanto el PO como el MST flexibilizaron su posición inicial. Tal fue así que el PO sostuvo que en el nuevo marco se abrían oportunidades para la rearticulación de la clase obrera, avanzando en la conformación de su propia organización (Natalucci, 2008b, Delamata 2004 y Svampa y Pereyra, 2003).



Del segundo eje del debate participaron los partidos que creían necesaria la constitución de organizaciones de desocupados. En este punto se discutió el tipo de organización y de alianzas. El PO y el MST promovían organizaciones clasistas, esto es, aquellas podían tener reivindicaciones sectoriales, como las territoriales, pero imprescindiblemente debía sobresalir el carácter de clase. Esto se fundamentaba en que la clase obrera era considerada de un modo holístico: por su lugar en la producción, por su hábitat. En consecuencia, la estructura partidaria debía tratar de igualar aquel realizado en las fábricas con los obreros. El corolario principal de esta lógica era que las organizaciones de desocupados no podían incluir a sectores de la pequeña burguesía o de la socialdemocracia como expresión política. Por el contrario, el PC y Patria Libre se inclinaban por la constitución de organizaciones con alianzas policlasistas, donde se contuvieran a sectores obreros y medios; en este marco fortalecieron su vinculación con CTA. Básicamente, las diferencias entre las dos posiciones radicaban en dos cuestiones, una respecto de la consideración acerca de cuáles eran los sectores afectados por la desocupación y otra relativa a las matrices ideológicas que pautaban las estrategias organizacionales, es decir las posiciones oscilaban si la constitución de la organización debía ser netamente obrera o la de un frente nacional.

El último eje se concentró alrededor de los planes sociales. En general, había coincidencias en que eran paliativos asistencialistas que no resolvían el problema de fondo, la desocupación, y que, además, operaban negativamente sobre los trabajadores ocupados, disminuyendo el piso mínimo de los salarios o deteriorando las condiciones de trabajo. Esta posición fue revertida por la presión de las bases a partir de la agudización de la crisis de 2001.

A lo largo de este proceso, las direcciones partidarias nacionales del MST, el PO, el PC y Patria Libre decidieron la creación de sus propias organizaciones de desocupados. Estas tuvieron un mayor crecimiento en los distritos donde los partidos tenían una estructura ya consolidada de militantes. Concretamente, la posibilidad de la extensión del trabajo político se vinculó a la capacidad de la estructura partidaria local de llevarlo adelante.



VI. Tensiones en el espacio piquetero: de las disputas a la ruptura

La intervención de los partidos de izquierda en el espacio piquetero a través de la constitución de sus propias organizaciones de desocupados, fue significativa en varios aspectos. Por un lado, respecto de la dimensión del espacio, la constitución de este afluyente fue determinante en su definitiva nacionalización en el sentido que, sin perder de vista los procesos locales precipitantes, la estrategia de estas organizaciones estuvo siempre atravesada por las decisiones partidarias y centralizadas en las conducciones nacionales. Sus objetivos se orientaban a la participación en el régimen político y la constitución de una oposición al gobierno nacional. Por otro lado, por su estructura previa contribuyeron a la extensión geográfica del espacio, de modo de revertir la centralización territorial inicial. Por último, promovieron la politización del espacio en el sentido de incentivar su participación en instancias del régimen político. Esta cuestión propició durante 2001 la realización de planes de lucha coordinados, que fomentaron el potencial del espacio.

Sin embargo, el intento de imponer una lógica de acción diferente a la que primaba en el espacio generó una situación de malestar que tensionó la estabilidad del espacio poniendo en cuestión su continuidad.

En este marco, se produjo la primera fractura. A propósito de los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre y de su caracterización se terminaron de conformar dos tendencias: el eje matancero y Bloque Piquetero (Svampa y Pereyra, 2003, Schuster, 2002). El primero –conformado por la FTV y la CCC– sostenía que la prioridad era atender la situación de precariedad que vivían los sectores populares. El Bloque Piquetero por su parte reunió a las organizaciones con vínculos con los partidos de izquierda. Su posición era que con los acontecimientos de diciembre se había abierto un momento pre-revolucionario, por lo que la tarea consistía en generar las condiciones para introducir cambios de fondo. Este alineamiento promovía la movilización callejera y la confrontación directa con el gobierno nacional. Tanto los movimientos autónomos como Barrios de Pie coordinaban acciones y protestas con el Bloque Piquetero, pero sin participar activamente de sus instancias internas (Natalucci, 2010b).

La distancia entre ambos alineamientos se profundizó a partir de la masacre del Puente Pueyrredón en junio de 2002. En dicha oportunidad, el dirigente de la FTV, Luis D'Elía se hizo eco de la versión gubernamental que atribuía el asesinato de dos militantes



del MTD Aníbal Verón a un enfrentamiento entre grupos piqueteros. Dicho dirigente fue repudiado por el arco piquetero; Barrios de Pie y el MTL se retiraron definitivamente de la Federación.

Pese a estas diferencias, había cuestiones que seguían compartiendo estos alineamientos: la identidad piquetera, el corte de ruta o en los accesos a los ingresos de las grandes ciudades. Pero además hubo dos novedades. La primera se relacionó con los términos de formulación y justificación de las demandas en tanto ya no se apelaba a derechos, como había sucedido en otro momento con la reparación histórica a regiones o trabajo. En ese vertiginoso 2002, la demanda principal era por asistencia social directa, concretamente por el otorgamiento de planes sociales. Este reclamo no sólo provenía del eje matancero, sino que también del Bloque Piquetero. Asimismo, ambos alineamientos compartían su rechazo a participar de los Concejos Consultivos creados durante el gobierno provisional de Eduardo Duhalde y a la intervención del PJ en dichos ámbitos.¹⁶ El reclamo se orientaba a constituirse en los destinatarios de los programas de asistencia y officar como mediadores con los desocupados. Este reclamo estaba vinculado con su intención de fortalecer el trabajo territorial.

La segunda ruptura se produjo en los primeros meses de 2003 a propósito de las elecciones presidenciales. Principalmente, esta tensión se produjo en el interior del Bloque Piquetero; dado que el eje matancero tenía como objetivo coordinar estrategias relacionadas con el trabajo territorial y de protestas, sin que esto implicara intentar acuerdos ideológicos o programáticos. Mientras, las organizaciones de izquierda pretendían que del espacio piquetero surgieran candidatos que pudieran nutrir sus propias listas partidarias, el MTD Aníbal Verón, Barrios de Pie, el Movimiento Teresa Rodríguez y el Movimiento Territorial de Liberación promovían una postura abstencionista o de boicot al proceso electoral. Aún con estas diferencias irreconciliables, esta ruptura no fue abrupta como sucedió con la primera. Aún así, cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia el 25 de mayo de 2003 el espacio piquetero ya estaba dividido.

En un contexto de normalización institucional –debida la reconstrucción de la figura presidencial y la estabilidad económica sostenida– el espacio piquetero rediscutió las cuestiones que aún compartían. En principio, se redefinió la identidad de las organizaciones, algunas pretendían identificarse a partir de su trabajo territorial o social; mientras que otras reforzaron su reconocimiento de piqueteros como opositores al gobierno nacional (Natalucci, 2008b).



Asimismo, el corte de ruta se vio fuertemente deslegitimado, no sólo por la campaña antipiquetera impulsada por los medios de comunicación, sino también desde el gobierno pedían desactivar las protestas (Svampa, 2005). Por supuesto, que varias organizaciones hayan desistido de utilizar esa modalidad incidió considerablemente en aislar a ciertos grupos, para los cuales fue difícil legitimar la radicalidad del corte en otro contexto. Por último, organizaciones que hasta entonces adherían a lo nacional y popular, como el MTD Evita, crecieron de un modo abrupto pasando a ocupar un lugar protagónico en la discusión sobre el devenir del espacio piquetero.

Estas novedades reconfiguraron los alineamientos interorganizacionales, las expectativas que cada organización tenía y revirtió la articulación entre movilización y trabajo territorial, nudo constitutivo del espacio piquetero.

VII. Reflexiones finales

La propuesta del artículo fue reconsiderar el espacio piquetero a la luz de reflexionar si se había constituido una nueva gramática política, específicamente atendiendo a cuestiones relativas a la performatividad y huellas de aquel. Para esto se emprendieron dos actividades. La primera fue delimitar y precisar conceptualmente que debe entenderse por la noción de gramática política. En principio, siguiendo a Pitkin, fue necesario reponer un modo wittgensteiniano de reflexionar y teorizar sobre los procesos de orden político. En esta dirección se diferenciaron tres acepciones: a) performatividad política de la acción; b) estructura motivacional de los sujetos implicados; y c) estructura organizativa de los movimientos sociales. Retomando algo ya mencionado, por gramática política debe entenderse un juego de reglas que delimita las interacciones de los sujetos y las posibles combinaciones de acciones en pos de coordinar, articular e impulsar intervenciones públicas dirigidas cuestionar, transformar o ratificar el orden social.

Inicialmente se postuló que la movilización y la acción territorial de las organizaciones piqueteras se habían rearticulado de una forma novedosa en el campo multiorganizacional. Al respecto surgía la pregunta si eso había implicado la conformación de una nueva gramática política. Para esto, la segunda actividad emprendida consistió en reconsiderar la trayectoria del espacio piquetero, atendiendo a sus afluentes y temporalidades. La respuesta a dicho interrogante no puede ser unívoca ya que es menester considerar las reglas y usos que dotan de un principio de inteligibilidad a las



acciones, que como bien señaló Arendt (2009) son constitutivamente contingentes, dando lugar a las combinaciones posibles que permitan la reafirmación o transformación del orden social. En este sentido, hay varias cuestiones para sopesar.

Una primera conclusión es que entre 1994 y 2003 se constituyó un espacio de experiencias piquetero a partir de la articulación de una modalidad de acción directa como el corte de ruta, la identidad piquetera y la construcción territorial, legitimada por el uso de un lenguaje de derechos y por la generación de un debate público en torno a procesos de inclusión y exclusión social. Sin embargo, ese espacio se conformó a partir de la presencia de tres afluentes, con diferencias respecto de sus orígenes, convicciones ideológicas y expectativas sobre la proyección del espacio. Esta diversidad incidió en que cada organización se apropiara de la identidad piquetera, del corte de ruta y de la construcción territorial de un modo particular.

Esta diversidad de afluentes se convirtió en un obstáculo para que el espacio pudiera formular, aunque sea tentativamente, una propuesta de ordenamiento social, es decir que además de una tendencia destituyente, tuviera algunos acuerdos respecto de la instituyente. De acuerdo a la exposición, a partir de 2002 el espacio piquetero se consolidó a partir de sectorizar sus demandas y profundizar la recepción y gestión de los planes sociales como condición de posibilidad para el desarrollo del trabajo territorial. A posteriori de 2003, en un contexto de progresiva normalización institucional, las diferencias se tensionaron al punto de volverse irreconciliables. Esto evidentemente impidió la continuidad de los espacios de coordinación interorganizacionales y dispuso a algunas organizaciones como portadoras del “deber ser piquetero”. Con la progresiva disolución del espacio, se agotaron también las posibilidades de su transcendencia.

En este sentido, es posible sostener que en ese proceso se conformó una gramática de la movilización, es decir vinculada a la dinámica organizacional y a su posicionamiento en el espacio público a partir de la formulación de un problema público y de un dispositivo de interpelación en pos de generalizarlo. Esto explica porque pese a que no se constituyó una nueva gramática política la experiencia piquetera dejó su huella en el campo militante, entendiendo por tal esos rastros con los cuales la referencia a su autor no es inmediata, cuando emergen nuevas pautas que inciden sobre otros. En tal perspectiva, diversas organizaciones incorporaron al corte de calle o de ruta como parte de su repertorio, reafirmando la potencialidad de la acción directa. Estas cuestiones expresaron nuevos aprendizajes y se constituyeron en parte del saber-hacer de los



sujetos organizados, del campo multiorganizacional militante, modificando gramáticas ya consolidadas como es el caso de la clasista o la movimientista. El desafío inconcluso se vinculó en todo caso con la formulación de un proyecto que excediera lo sectorial y propusiera un horizonte de expectativas donde orientar la acción.

Para finalizar, cabe decir que esta reflexión permite sortear la oscilación entre posturas celebratorias o miserabilistas del espacio piquetero y reponer, a cambio, una discusión acerca de las huellas que aquel dejó en las gramáticas políticas de los sectores populares.

Referencias bibliográficas

ARENDDT, Hannah. (2009). *La condición humana*. Buenos Aires: Paidós.

ARMELINO, Martín. (2004). Algunas diferencias al interior del *campo popular*: la experiencia reciente de la CTA y la FTV. En *Informe final de investigación: Proyecto Poder y nuevas experiencias democráticas en América Latina y el Caribe*, Programa de becas CLACSO-ASDI, Buenos Aires.

AUYERO, Javier. (2004). *Vidas Beligerantes*. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.

AUYERO, Javier. (2002). La protesta. Retratos de la beligerancia popular en la Argentina democrática. Buenos Aires: UBA.

BUKART, Mara y VÁZQUEZ, Melina. (2008). Dilemas y desafíos de la coordinación: el caso de las organizaciones de Trabajadores Desocupados autónomas en Argentina. En Sebastián Pereyra, Germán Pérez y Federico Schuster (Eds.), *La huella piquetera. Avatares de las organizaciones piqueteras pos crisis de 2001* (pp. 277-310). La Plata: Al Margen.

CALVO, Dolores. (2006). *Exclusión y política. Estudio sociológico sobre la experiencia de la Federación de trabajadores por la Tierra, la Vivienda y el Hábitat (1998-2002)*. Buenos Aires: Miño y Dávila.

CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES (CELS) (2003). *El Estado frente a la protesta social, 1996-2002*. (Autor) Buenos Aires: Siglo Veintiuno.

DELAMATA, Gabriela y MELCHOR, Armesto. (2005). Construyendo pluralismo territorial. Las organizaciones de desocupados del Gran Buenos Aires en la perspectiva de sus bases sociales. En Gabriela Delamata (Comp.), *Ciudadanía y Territorio* (p p. 105-156). Buenos Aires: Espacio.



- DELAMATA, Gabriela. (2004). *Los Barrios desbordados. Las organizaciones de desocupados del Gran Buenos Aires*. Buenos Aires: Eudeba.
- FERRADI CURTO, Cecilia. (2008). Entre vecinos y piqueteros: la apuesta del MTR en la multisectorial de Alvarado frente a los dilemas de la organización. En Sebastián Pereyra, Germán Pérez y Federico Schuster (Eds.), *La huella piquetera. Avatares de las organizaciones piqueteras pos crisis de 2001* (pp. 233-250). La Plata: Al Margen.
- FERRER, Nelson. (2005). *El MTA y la resistencia al neoliberalismo en los 90*. Buenos Aires: Dos Orillas.
- FORNILLO, Bruno. (2008). Acerca de la corriente clasista y combativa frente al gobierno de Kirchner. Del diálogo a la oposición (2003-2007). En Sebastián Pereyra, Germán Pérez y Federico Schuster (Eds.), *La huella piquetera. Avatares de las organizaciones piqueteras pos crisis de 2001* (pp. 233-250). La Plata: Al Margen.
- GARGARELLA, Roberto. (2006). *Carta abierta sobre la intolerancia. Apuntes sobre derecho y protesta*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- GIRRACA, Norma y WAHREN, Juan. (2005). Territorios en disputa: iniciativas productivas y acción política en Mosconi, Argentina. En OSAL: *Observatorio Social de América Latina*, Año 6, N° 16. Buenos Aires: CLACSO. Recuperado de: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal16/D16GiarraccaWahren.pdf>
- GÓMEZ, Marcelo y MASEETTI, Astor. (2009). *Los movimientos sociales dicen*. Buenos Aires: Nueva Trilce.
- GORDILLO, Mónica y NATALUCCI, Ana. (2005). "Vulnerabilidades regionales y acción colectiva: el caso de Cruz del Eje, Córdoba". *Realidad Económica*, 211, 103-127.
- KOSELLECK, Reinhart. (2001). *Los estratos del tiempo: estudios sobre la historia*, Barcelona: Paidós.
- KOSELLECK, Reinhart. (1993). *Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos*. Barcelona: Paidós.
- LUCERO, Marcelo y GRAFFIGNA, María Luisa. (2007). Del desempleo a la desocupación: categorización normativa en los programas de empleo. En Marcelo Lagos, María S. Fleitas y María T. Bovi (Comps), *A cien años del informe de Bialet Massé. El trabajo en la Argentina del siglo XX y albores del XXI*, tomo II (p.p. 207-222). Jujuy: Editorial de la Universidad Nacional de Jujuy.
- MASSETTI, Astor. (2009). *La década piquetera*. Buenos Aires: Nueva Trilce.



MERKLEN, Denis. (2005). *Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática (Argentina, 1983-2003)*. Buenos Aires: Gorla.

NATALUCCI, Ana. (2007). "La unidad de los que luchan: las Asambleas Nacionales Piqueteras (2001)". *Revista Question*, 16. Recuperado de: www.perio.unlp.edu.ar/question.

NATALUCCI, Ana. (2008a). *Sujetos políticos, procesos de reconstitución identitaria y protestas sociales: las organizaciones piqueteras de Córdoba, 1994-2006*, Tesis de Maestría en Investigación en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, mimeo.

NATALUCCI, Ana. (2008b). Las estrategias de las organizaciones de izquierda frente a la crisis de 2001. El caso del Polo Obrero. En Sebastián Pereyra, Germán Pérez y Federico Schuster (Eds.) *La huella piquetera. Avatares de las organizaciones piqueteras pos crisis de 2001* (pp. 205-232). La Plata: Al Margen.

NATALUCCI, Ana. (2010a). Movilización piquetera y movilización sindical: las organizaciones populares en tiempos de reforma estructural (Córdoba, 1995-2001), Tesis doctoral, Facultad de Ciencias Sociales. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, mimeo.

NATALUCCI, Ana. (2010b). "Aportes para la discusión sobre la autonomía o heteronomía de las organizaciones sociales. La experiencia del Movimiento de Barrios de Pie, 2002-2008". *Revista Laboratorio. Revista de Estudios sobre Cambio Estructural y Desigualdad Social*, "La Protesta Social hoy", año XI, 23, 137-163.

PÉREZ, Germán y NATALUCCI, Ana. (2008). Estudios sobre movilización y acción colectiva: interés, identidad y sujetos políticos en las nuevas formas de conflictividad social. En Ana Natalucci (Ed.), *Sujetos, movimientos y memorias. Sobre los relatos del pasado y los modos de confrontación contemporáneos* (pp. 81-102). La Plata: Al Margen.

PÉREZ, Germán. (2005). Pálido fuego: Hannah Arendt y la declinación de la figura del trabajador en las sociedades contemporáneas. Apuntes sobre los piqueteros en Argentina. En Francisco Naishtat, Gabriel Nardacchione, Sebastián Pereyra y Federico Schuster (Comps.), *Tomar la palabra* (pp. 313-342). Buenos Aires: Prometeo Libros.

PITKIN, Hannah. (1984). *Wittgenstein: el lenguaje, la política y la justicia*. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.

PEREYRA, Sebastián; PÉREZ, Germán y SCHUSTER Federico (Eds.) (2008). *La huella piquetera. Avatares de las organizaciones piqueteras pos crisis de 2001*. La Plata: Al



Margen.

QUIROS, Julieta. (2006). "Cruzando la Sarmiento. Una etnografía sobre piqueteros". *La trama social del sur del Gran Buenos Aires*. Buenos Aires: Antropofagia.

RASCHKE, Joachim. (1994). "Identidad e interés". *Zona Abierta*, 69, 121-134.

SCHUSTER, Federico. (2006). Wittgenstein y la política. En Federico Penelas y Glenda Satne, *Gramáticas, juegos y silencio. Discusiones en torno a Wittgenstein*, (pp. 103-112). Buenos Aires: Grama.

SCHUSTER, Federico, PÉREZ Germán, PEREYRA Sebastián, ARMESTO Melchor, ARMELINO Martín, GARCÍA Analía, NATALUCCI Ana, VÁZQUEZ Melina y ZIPCIOGLU Patricia. (2006). *Transformaciones de la protesta social en la Argentina, 1989-2003*. Buenos Aires: Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales (UBA).

SCHUSTER, Federico (Comp.) (2002). *La Trama de la crisis. Modos y formas de protesta a partir de los acontecimientos de diciembre de 2001*. Buenos Aires: Centro de Documentación e Información, IIGG, FCS, UBA.

SVAMPA, Maristella. (2008). Prefacio. En Sebastián Pereyra, Germán Pérez y Federico Schuster (Eds.), *La huella piquetera. Avatares de las organizaciones piqueteras pos crisis de 2001* (pp. 9-13). La Plata: Al Margen.

SVAMPA, Maristella. (2005). *La sociedad excluyente*. Buenos Aires: Taurus.

SVAMPA, Maristella y PEREYRA, Sebastián. (2003). *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras*. Buenos Aires: Biblos.

TROM, Danny. (2008). Gramática de la movilización y vocabularios de motivos. En Ana Natalucci (Ed.), *Sujetos, movimientos y memorias. Sobre los relatos del pasado y los modos de confrontación contemporáneos* (pp. 21-47). La Plata: Al margen [Original: Grammaire de la mobilisation et vocabularios de motifs. Traducción Vanina Papalini y Georgina Remondino].

Notas

¹ Este artículo retoma algunas conclusiones de mi tesis doctoral en Ciencias Sociales "Movilización piquetera y movilización sindical: las organizaciones populares en tiempos de reforma estructural (Córdoba, 1995-2001)", financiada con una beca doctoral de CONICET y realizada en el marco del Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Le agradezco a Germán Pérez los comentarios que permitieron mejorar esta versión.

² Una clásica definición de movimiento social fue ofrecida por J. Raschke: "Actor colectivo movilizador que, con cierta continuidad y sobre las bases de una alta integración simbólica y una escasa especificación de su



papel, persigue una meta consistente en llevar a cabo, evitar o anular cambios sociales fundamentales, utilizando para ellos formas organizativas y de acción variables” (1994: 124). Desde la teoría de movilización de recursos y de procesos políticos esta concepción fue sumamente cuestionada, en lo particular por su estatuto teórico y las dimensiones empíricas que lo hacían inteligibles. Retomando a C. Tilly ¿qué dimensión define lo que puede ser considerado un movimiento, la red de acciones dentro de la cual se constituye la identidad, y por lo tanto un movimiento, o el actor entendido como una posición estructural que habilita nuevas demandas y repertorios ? (Pérez y Natalucci, 2008: 97).

³ Una definición de sujeto político es proporcionada por Pérez y Natalucci: “aquel colectivo capaz de trabajar sus propios relatos y tradiciones solicitando, conmoviendo, subvirtiendo un dispositivo” (2008: 99).

⁴ El concepto de impacto político es pensado en dos dimensiones: la performatividad y las consecuencias estratégico-institucionales. La primera remite a la capacidad de una “enunciación pública de redefinir las reglas y los recursos que constituyen el campo simbólico dentro del cual se produce y se reconoce” (Pérez, 2005: 330). La segunda, las consecuencias estratégico-institucionales, alude a “los resultados que producen las protestas ya sea en términos de la satisfacción de sus demandas o de las transformaciones del sistema político institucional” (Schuster, et. al. 2006: 31).

⁵ Respecto de la discusión en torno de la acción, es muy interesante el planteo que realiza Pitkin. En este sentido, la autora cuestiona que el análisis de aquella noción se realice a partir de los actores y su intencionalidad, por los conceptos que usan y de acuerdo con sus normas. Eso llevaría de acuerdo con Pitkin a explicar las acciones en términos de “las intenciones, motivos, razones y propósitos de los actores” (1984: 350). La autora critica a autores como Schutz, Arendt, Winch precisamente porque consideran que la “acción es convencional y con arreglo a fines” y en este sentido puede ser “identificada únicamente de acuerdo con las convenciones que la gobiernan y con los propósitos que la informan” (1984: 354).

⁶ Al respecto, Schuster retomando a Heyes menciona que “Wittgenstein nunca escribió realmente ninguna cosa que pudiera considerarse filosofía política y era profundamente escéptico sobre la posibilidad del cambio social mediante el uso de pensamiento político programático (2006: 103).

⁷ En 1991 se sancionó el decreto N° 2.284 que modificaba los costos internos y el sistema de precios y la derogación de medidas regulatorias de productos regionales. precisamente la crisis de las economías regionales se suscitó a raíz de la suspensión de estas normativas, que privilegiaba sus producciones respecto de las importadas y se disolvieron los entes que regulaban su funcionamiento. Las primeras afectadas fueron las que mantenían una relación de dependencia mayor hacia el Estado (Gordillo y Natalucci, 2005). Luego se agudizó la situación de las regiones cuya economía giraba en torno a las empresas estatales privatizadas, como fue el caso de las provincias de Neuquén y Salta por la venta de YPF.

⁸ Para un análisis minucioso de la CTA y MTA consultar Armelino (2004) y Ferrer (2005) respectivamente.

⁹ Luis D’Elía tiene una trayectoria como militante barrial que data de la toma de tierras fiscales en los años ochenta en el populoso conurbano bonaerense. A partir de su afiliación a la CTA en 1996 se ocupó de la organización de su frente territorial llamado FTV, desde entonces ha sido su dirigente.

¹⁰ Sobre la FTV puede consultarse: Merklen (2005) por la reconstrucción de la cooperativa El Tambo, Svampa y Pereyra (2003) y Calvo (2006) para profundizar sobre la constitución y desarrollo de la organización, y Armelino (2004) acerca de la relación entre FTV y CTA.

¹¹ Las Asambleas Nacionales Piqueteras se realizaron en julio y septiembre de 2001 y constituyeron por un lado, el máximo esfuerzo de articulación y coordinación de las organizaciones piqueteras y por otro, la mayor capacidad de movilización y confrontación con el gobierno nacional. La exposición de su proceso amerita un artículo propio, para profundizar sobre él, véase Burkart y Vázquez (2008), Natalucci (2007) y Svampa y Pereyra (2003).

¹² El tipo y cantidad de planes sociales otorgados fue variando de acuerdo al gobierno nacional. La mayoría de los programas tenían como destinataria a la población en situación de vulnerabilidad social, entre ellos el Plan Trabajar I y II aplicados desde 1996. Según datos proporcionados por el CELS “la población beneficiaria ascendió de 110 mil personas en mayo de 1997 a 350 mil en mayo de 1998” (2003: 32). Para reconstrucción del proceso histórico véase Svampa y Pereyra (2003) y CELS (2003), para una lectura jurídica, Lucero y Graffigna (2007).

¹³ Tal vez el ejemplo excepcional al comportamiento del espacio fue Unión de Trabajadores Desocupados de Tartagal, Salta, quien propició la generación de nuevas formas de trabajo, lejos del imaginario asalariado-fabril (Giarracca y Wahren, 2005).

¹⁴ El PTS y MTS son una escisión del Movimiento al Socialismo (MAS), continuación del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) de tradición morenista. Nahuel Moreno fue un conocido dirigente de izquierda: en 1965 fundó junto a Roberto Santucho el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), reivindicado



marxista-leninista y adherente a la IV Internacional Socialista. Sin embargo, en 1968 ante la discusión sobre la lucha armada, Moreno rompe con el PRT, formando la escisión PRT "La Verdad". En 1972 formó junto el Partido Socialista Argentino el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), antecedente directo del Movimiento al Socialismo (MAS) constituido en los ochenta. Moreno fue un símbolo para los partidos de izquierda que se reconocían trotskistas y que rechazaban la lucha armada como estrategia política.

¹⁵ La Corriente Patria Libre se fundó en Córdoba en 1987, muchos de sus fundadores habían militado en las organizaciones político-militar en los años setenta. Se auto definía de izquierda nacional, popular y revolucionaria. Desde su origen adoptó el centralismo democrático como modalidad de organización interna. Véase Natalucci (2010b), Gómez y Massetti (2009) y Svampa y Pereyra (2003).

¹⁶ Los Consejos Consultivos de Políticas Sociales fueron creados por los derechos 108/02 y 565/02 en el marco del diseño y aplicación de los planes "Jefes y Jefas de Hogar Desocupados". "Entre las funciones asignadas en la normativa vigente, se propone que el CCPS participe en la "orientación, implementación y auditoría social de las políticas sociales". Las acciones previstas son de "monitoreo y evaluación", y se prevé la tarea de fortalecimiento de los demás Consejos Consultivos en coordinación con la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano a través de la Dirección de Educación Social Popular". La organización preveía varios niveles: nacional, provincial, local y barrial (Documento ¿Qué son los Consejos Consultivos de Políticas Sociales? <http://www.desarrollosocial.gov.ar/CConsultivos>).

Fecha de recepción: 19 de mayo. Fecha de aceptación: 17 de agosto.